



Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 6 á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRIMERA SECCION.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la REINA nuestra Señora (O. D. G.) y su augusta Real Familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES DECRETOS.

En los autos y expediente de competencia suscitada entre la Sala primera de la Audiencia de Sevilla y el Gobernador de la provincia de Cádiz, de los quales resulta:

Que el Presbítero D. Manuel Bosichi, poseedor de la capellanía fundada por Doña Micaela Núñez de Castro, pidió al Juez de primera instancia de Cádiz, que en virtud de los instrumentos que presentaba, se despaclase ejecución contra D. Segundo González, poseedor de una casa gravada con un censo á favor de la indicada capellanía por los réditos vencidos desde 1.º de enero de 1856, hasta 31 de diciembre de 1857.

Que despaclada en efecto la ejecución pidió Don Segundo González, que se despaclasen unas, entre otras consideraciones, porque según la escritura que acompañaba había comprado á la Hacienda pública en 18 de enero de 1856, conforme á la ley de desamortización la finca contra la cual se repetía, procedente de Beneficencia, pagando su precio sin deducción del capital del censo de que se trata.

Que seguidos varios trámites, entre otros la citación de evicción á la Hacienda pública, que no fue aceptada, y recibido el pleito á prueba, recayó sentencia en 14 de enero de 1859 mandando seguir la ejecución adelante, haciéndose tráfego y remate de bienes, de la cual interpuso apelación D. Segundo González, que le fue admitida en el efecto devolutivo en 27 del próximo mes.

Que entretanto había acudido en 17 del expresado mes al Gobierno de provincia el mismo Don Segundo González, pidiendo que se le relajase de los plazos que aún no había satisfecho de la finca comprada, el principal del censo y la cantidad que por rédito vencido se le reclamaba judicialmente.

Que el Gobernador pidió informe al Administrador de Propiedades y Derechos del Estado y al Fiscal de Hacienda, quienes dijeron, con relación á la cuestión del día primero, que con arreglo á instrucción no se había hecho la deducción del capital del censo por considerarlo de los pertenecientes á fundaciones cuyos bienes estaban declarados en venta, toda vez que en la época en que tuvo lugar la capitalización no se conocía poseedor de la capellanía, entonces vacante, á que pertenece el censo que grava sobre la casa vendida; y segundo, que se debía oficiar al Juez de primera instancia protestando de la nulidad del indicado juicio ejecutivo por no haber precedido la vía gubernativa, conforme al art. 173 de la instrucción de 31 de mayo de 1855.

Que el Gobernador, después de dirigir al Juez comunicaciones en este sentido, entabló competencia sobre conocimiento del negocio, que fue sustanciada por la Sala primera de la Audiencia del territorio donde obraban los autos, sosteniendo la jurisdicción ordinaria, porque al venderse la casa, á González se hizo con el gravamen del censo, cuyos réditos se reclaman, y en su consecuencia el artículo 173 de la instrucción de 31 de mayo de 1855 no es aplicable á la demanda del Presbítero Bosichi, toda vez que no versa esta sobre la posesión de la finca, ni sobre cargas que no se hubiesen comprendido en la escritura correspondiente.

Que el Gobernador, conforme con la Administración principal de Propiedades y Derechos del Estado y con el Consejo provincial, se declaró competente, en atención á que, si bien en la escritura de venta se expresó el censo, fue consignado al mismo tiempo que era á favor de dueño desconocido, y sin deducir su capital del importe de la finca, cuyos plazos se tienen pagando íntegros, todo de acuerdo con la condición 2.ª de la escritura, que es la 5.ª del art. 132 de la instrucción de 31 de mayo de 1855, por lo cual el Presbítero Bosichi ha debido

acudir á la Autoridad administrativa, que es la competente para resolver todo lo relativo á la validez ó nulidad de las ventas de bienes nacionales, interpretación de sus cláusulas etc.

Visto el art. 173 de la instrucción de 31 de mayo de 1855, que previene que no se admita por los jueces de primera instancia ni otras Autoridades judiciales demanda alguna contra las fincas que se enajenen por el Estado sin que el demandante acompañe documento de haber hecho la reclamación gubernativamente, y sídole negada:

Vista la condición 5.ª del art. 132 de la propia instrucción, en que se establece que las cargas que graviten sobre las fincas á favor de particulares ó de los bienes exceptuados por el art. 2.º de la ley de 1.º de mayo han de quedar de cuenta del comprador, siempre que sean corrientes y conocidas, pues las que fueren á favor de las corporaciones, cuyas fincas estaban declaradas en venta, se enajenan con ellas, y queda su pago por cuenta del Estado:

Visto el art. 112 de la misma instrucción, que determina que las cargas que están impuestas á favor de particulares y de corporaciones ó bienes que se hallen exceptuados por la ley, serán las que se relajen del precio del remate:

Visto el art. 143 de la misma, según el cual, si aconteciera que la finca subastada apareciese con cargas á favor de las corporaciones cuyos bienes están declarados en venta, se consignará así en la liquidación, con expresión de los réditos y corporaciones á cuyo favor se hallaren impuestas:

Visto el art. 96, párrafos tercero y octavo de la instrucción mencionada, que prescriben que corresponde á la Junta de Ventas de Bienes nacionales entender en los expedientes de reclamación de pago de las cargas ó créditos á que estén afectos los bienes comprendidos en el artículo 1.º de la ley de 1.º de mayo de 1855, entre los cuales se encuentran los de beneficencia, en la resolución de todas las reclamaciones ó incidencias de ventas de fincas, censos ó sus redenciones:

Considerando que por más que la falta de cumplimiento de la disposición directamente prescrita á la Autoridad judicial en el art. 173 de la instrucción de 31 de mayo de 1855, no sea por sí sola

fundamento bastante para provocar esta clase de contiendas, ofrece el negocio presente en su fondo otros aspectos que le hacen de la competencia de la Administración, porque ora se mire como una cuestión relativa á la inteligencia que deba darse, respecto al censo de que se trata, á la escritura de venta de la casa de beneficencia otorgada á favor de González, ó á si la escritura está ó no ajustada á lo dispuesto en los artículos 132, 142 y 143 de la instrucción, ora como la reclamación de un censo impuesto sobre una finca de Bienes nacionales, que en su actual estado suscita duda sobre su legítimo censuario, y de cuyo importe puede resultar responsable el Estado, es evidente que corresponde á la Autoridad administrativa su conocimiento, según lo prescrito en el art. 96 de la propia instrucción citada:

Conformándose con la consulta del Consejo de Estado en pleno,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración.

Dado en Palacio á 24 de octubre de 1860.—Está rubricado de la Real mano, —El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Orense y el Juez de primera instancia de Lema, de los quales resulta:

Que D.ª Florentina Delgado y D.ª Matilde Alvarez, mujeres legítimas de Don Leoncio y D. Rodrigo Fernandez Campomanes, se constituyeron con sus maridos fiadores del rematante de las obras de las Casas consistoriales y cárceles de Mieres, obligando para la expresada responsabilidad sus personas y bienes en la correspondiente escritura pública en 23 de julio de 1856:

Que por falta de cumplimiento del contrato por parte del rematante se procesó contra éste y sus fiadores por el Ayuntamiento al embargo y venta de bienes:

Que en tal estado D.ª Florentina y D.ª Matilde presentaron ante el Juez de primera instancia demanda de tercera de dominio y de mejor derecho, pidiendo al mismo tiempo que se rescindiera la escritura de 23 de febrero de 1856 con relación á sus personas, cubriendo sus deudas con preferencia al Ayuntamiento de Mieres:

Que el Gobernador de la provincia excitado por el Ayuntamiento y conforme con el Consejo provincial, requirió al Juez

de inhibición invocando el párrafo tercero del art. 8.º de la ley de 2 de abril de 1835:

Que el Juez, después de sustanciar el artículo de competencia, sostuvo la jurisdicción, invocando, entre otras leyes menos referentes al caso, la Real orden de 20 de setiembre de 1852:

Y que el Gobernador, conforme con el Consejo provincial, insistió en la presente contienda, fundando en que la demanda comprende la rescisión del contrato; y mientras esto no se resuelva administrativamente, no se halla preparado el incidente de tercería:

Visto el art. 8.º, párrafo tercero de la ley de 2 de abril de 1835, según el cual, los Consejos provinciales actuarán como Tribunales en los asuntos administrativos, y oírán y fallarán, cuando pasen á ser contenciosas, las cuestiones relativas al cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos de los contratos y remates celebrados con la Administración general y con las provinciales y municipales para toda especie de servicios y obras públicas:

Considerando:

1.º Que la demanda interpuesta ante el Juez de primera instancia de Lérida abraza manifiestamente, según se expresa en la misma, la rescisión de una parte de la escritura de 23 de julio de 1836, lo cual envuelve cuestiones de interés administrativo, porque está escrita en un contrato para una obra pública.

2.º Que en virtud de la atribución y jurisdicción que la ley citada de 2 de abril de 1835 da terminantemente á los Consejos provinciales para entender en cuestiones relativas á la rescisión de esta clase de contratos, es incontestable que corresponde á la Autoridad administrativa el conocimiento del negocio;

conforme con la consulta del Consejo de Estado en pleno.

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración.

Dado en Palacio á 24 de octubre de 1860. — Está rubricado de la Real mano. — El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Cáceres y el Juez de primera instancia de Navalmoral, de los cuales resulta:

Que D. Zacarías Sanchez Romera, vecino de Garvin, acudió ante el Juzgado con un interdicto de recobrar, contra sus convecinos Vicente Muñoz Berzosa, Luis Martín, Pedro Martín, Manuel Calderón y Leandro Toribio, porque llevando aquel en arrendamiento ciertas tierras pertenecientes al hospital de Santiago de Toledo, habían entrado éstos á labrarlas á título de compradores de las mismas al Estado, pero sin previo desahucio y sin cumplir con lo prescrito en la ley de 30 de abril de 1856:

Que celebrado el juicio sin audiencia de los querrelados, y decretada la restitución, el Gobernador de la provincia requirió de inhibición al Juzgado:

Que habiéndose negado el Juez á inhibirse bajo el equivocado supuesto de que se suscitaba la competencia en un negocio fenecido con sentencia ejecutoria, el Gobernador insistió en su requerimiento y resultó el presente conflicto:

Visto el art. 10 de la ley de 20 de febrero de 1850, que dice: «corresponden al orden administrativo la venta y administración de los bienes nacionales y fincas del Estado, y las contiendas que sobre propiedad, de subasta ó de arrendamientos de bienes nacionales, ocurrieren entre el Estado y los particulares, se ventilarán ante los Consejos provinciales, y el Real en su caso respectivo, si no hubiesen podido terminarse gubernativamente con mutuo consentimiento»:

Visto el art. 1.º de la Real orden de 20 de setiembre de 1852, que establece como del conocimiento de los Consejos

provinciales, y del Real en su caso, todas las cuestiones contenciosas relativas á la validez, inteligencia y cumplimiento de los arriendos y subastas de los bienes nacionales y actos posesorios que de ellos se deriven hasta que el comprador sea puesto en pacífica posesión de ellos:

Visto el párrafo octavo, art. 96 de la instrucción de 31 de mayo de 1855, que determina que la Junta de ventas de Bienes nacionales entenderá en la resolución de todas las reclamaciones é incidencias de las ventas de fincas.

Considerando:

1.º Que en virtud del carácter de bienes nacionales que tenían las tierras que Sanchez Romera llevaba en arrendamiento, á las Autoridades administrativas y Tribunales de su orden toca el conocer de todas las incidencias á que este contrato pudiera dar lugar, y amparar al arrendador en los derechos que por él le habían conferido.

2.º Que no pudiendo menos de considerarse la queja entablada ante el Juzgado de Navalmoral como consecuencia de la subasta de fincas pertenecientes á la nación, carecía el Juzgado de jurisdicción para conocer de ella en virtud de lo dispuesto en el art. 96 de la instrucción de 31 de mayo, antes citada, y de la reserva expresamente hecha á la Administración para entender en todas las incidencias y reclamaciones de la venta de bienes nacionales hasta poner á los compradores en su pacífica posesión;

Conformándose con la consulta del Consejo de Estado en pleno.

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administración.

Dado en Palacio á 24 de octubre de 1860. — Está rubricado de la Real mano. — El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

(Gaceta de 6 del actual.)

CONCLUXE el reglamento de la Escuela general de Herradores y forjadores.

Disposiciones generales y transitorias.

1.º A los que al principiar á regir este reglamento se hallen en la Escuela de Herradores como alumnos, principiará á contárseles el tiempo de curso desde el día que se abran las Cátedras con sujeción á lo nuevamente determinado.

2.º A los que sean expulsados y sujetos á lo que dispone el artículo 29, solo principiará á contárseles la pérdida del tiempo servido desde el día en que se abra el primer curso según este reglamento.

3.º Los Herradores que existen hoy en el ejército procedentes de la Escuela, y que por no haber cursado en la misma con sujeción á las nuevas prescripciones de este reglamento no puedan optar á todas sus ventajas, con el fin de no defraudarles en las esperanzas que concibieron al ingresar en aquella bajo las garantías consignadas en el reglamento aprobado en Real orden de 18 de noviembre de 1858, y para conciliar al propio tiempo el bien del servicio con el de los interesados, se observarán los preceptos siguientes:

A medida que haya vacante, después que salga aprobada una clase, según la nueva instrucción de este reglamento, podrán reingresar en la Escuela de Herradores de que se trata con el fin de adquirir los conocimientos científicos que les faltan para sufrir el examen y obtener la aprobación de los dos años.

Al efecto, los que reingresasen se han de obligar precisamente á servir tres años en el ejército desde el día que sean aprobados; por manera que si para cumplir el tiempo de su empeño les faltase menos de los tres, se reengancharán por el tiempo de diferencia, sin que por esto se releve del total cumplimiento de su em-

peño á los que les falte mas de los tres años.

Para que el complemento que se les concede dé el resultado que tiene por objeto, los Profesores de los regimientos procurarán que se preparen los Herradores comprendidos en esta disposición, al tenor de lo que previenen los artículos 46 y 47 de este reglamento.

Los casos especiales que puedan ocurrir en los Herradores á que se contraen estas disposiciones, y hayan salido de la Escuela antes de regir el reglamento, citado del 18 de noviembre de 1858, los resolverá el Director general de Caballería con presencia de los antecedentes é informes que reciba de los Jefes de los interesados; pero teniendo siempre presente que han de servir aquellos precisamente tres años después de obtenida la aprobación de los dos de carrera, y sin alteración respecto á la parte científica.

Asimismo el Director general de Caballería dispondrá la forma en que hayan de ingresar los Herradores con presencia de las necesidades de las dependencias en que sirvan.

Los Herradores que reingresen, quedan en un todo sujetos á las prescripciones de este reglamento en cuanto á las pérdidas de curso.

4.º Para alimentar la enseñanza de los Herradores en la parte práctica del herrado, los regimientos existentes en Alcalá de Henares contribuirán con sus caballos para la Escuela general bajo el precio á que salga el herraje en la cuenta general que se forma mensualmente; pero esta disposición no exime á los Herradores de los reidos cuerpos de alternar entre sí en la asistencia á dicho acto de herrado, como medio de que no pierdan ó se atrasen en la práctica que tienen adquirida.

5.º Para la compra y entretenimiento del material indispensable á la instrucción científica, fraguas y demás útiles que son necesarios á la Escuela de Herradores, se abonarán mensualmente por la Administración militar 2.000 rs. que serán reclamados en los extractos de revista y aplicados al fondo de entretenimiento de Escuelas, que es el que sufragará todos los gastos del establecimiento.

6.º Quedan nulas, sin efecto y denegado valor cuantas disposiciones precedían á este reglamento y estén en contradicción con él.

TÍTULO ADICIONAL.

De los Forjadores.

Artículo 1.º Combien en la Escuela de Herradores se han enseñado hasta aquí, y han de continuar recibiendo su instrucción los forjadores de que se sirven los institutos montados, el número de aspirantes para esta clase será el de 20, atendido el de plazas que tienen que cubrir.

Art. 2.º Su procedencia será de la clase de quintos elegidos entre los que se alistaron voluntariamente y reúnan mas conocimientos en el forjado, pudiendo admitirse también en caso necesario voluntarios de 20 á 30 años de edad que deberán filiarse precisamente por ocho años, disfrutando del premio pecuniario que señala el art. 21 de la ley de redención del servicio militar; mas, de ningún modo gozaran de las garantías especiales que por este reglamento se otorgan á los herradores de igual procedencia.

Art. 3.º Los forjadores, aunque incorporados á la Escuela de Herradores, considerando que es muy limitada su instrucción teórica y muy extensa la práctica, los Catedráticos determinarán, previa la venia del Jefe de la Escuela general, la forma en que han de recibir su enseñanza.

Art. 4.º Como los forjadores no tienen mas destino ulterior que pasar de obreros á los cuerpos ó dependencias en que se consideran necesarios, y sin derecho á ningún grado en la carrera Veterinaria, el examen lo sufrirán bajo la presidencia del Jefe del establecimiento ó de la persona en quien delegase, en cualquier

ra época en que los Catedráticos de la Escuela de Herradores declare que se hallan en esta lo de sufrirlo; y si de él resultan aprobados, se les expedirá la correspondiente certificación por los Catedráticos, visada por el Jefe del establecimiento, con la que pasarán á los regimientos, escuadrones ó brigadas de artillería donde haya vacante, y si no, permanecerán en la Escuela dedicados al trabajo de su oficio hasta que sean reclamados para ocuparlos.

Art. 5.º Los forjadores con plaza efectiva en los cuerpos disfrutarán la misma gratificación de 40 rs. que señala á los Herradores el art. 45.

Art. 6.º El uniforme será igual al de los Herradores.

Barcelona 24 de setiembre de 1860. — Hay un sello del Ministerio de la Guerra. — Aprobado por S. M. — O'Donnell.

(Gaceta de 22 de octubre último.)

SEGUNDA SECCION.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA.

CIRCULAR NUM. 634.

Dirección de Gobierno.

Acordando que las Autoridades, Corporaciones ó particulares pueden proceder á la adjudicación de ciertos donativos.

Por la Junta de donativos para los heridos é inutilizados en la campaña de Africa se me dice lo que sigue:

Habiéndose consultado á esta Junta por algunas Autoridades, Corporaciones ó particulares, de qué manera habrán de proceder á la adjudicación de donativos hechos ó recaudados en favor de los heridos é inutilizados y familias de los fallecidos en la gloriosa campaña de Africa, que sean naturales de provincias ó de localidades determinadas ó que reúnan circunstancias especiales de ciertos hechos de armas ú otros que los donantes hubiesen fijado en sus ofrecimientos, ha acordado que las referidas Autoridades, Corporaciones ó particulares pueden proceder á la adjudicación de dichos donativos, pero sujetándose estrictamente á las cláusulas expresadas en la relación, participando luego á esta Junta la distribución que hubiesen verificado con arreglo á lo mandado en la Real orden de 31 de julio último, inserta en la Gaceta de 5 de agosto siguiente.

Mas, como en la mayor parte de los casos las referidas Corporaciones no tendrán los datos necesarios para saber qué individuos reúnen las condiciones de cada donación, siempre que ocurran dudas, acudirán á esta Junta con el objeto de que en virtud de los antecedentes que obren en su Secretaría y de las noticias que pueden reclamar de las diversas dependencias del Estado, se averigüe los que resulten comprendidos en ellas.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento de quien corresponda. Orense noviembre 9 de 1860. — Francisco Javier Camuño.

En vista de que algunos Ayuntamientos de esta provincia se olvidan de cumplir o demoran lo dispuesto en el artículo 55 de la Instrucción de 31 de mayo de 1855, acerca de la formación de expedientes para la exención de ventas que correspondan á los montes y fincas de aprovechamiento común ó por otra causa justa; visto también que por esta comisión se aglomeran en este Gobierno de provincia y en la Comisión de ventas un número de solicitudes cuyo curso se hace difícil ó imposible, porque tienen por objeto en su mayor parte la suspensión de remates anunciados; conformándose con lo propuesto á mi autoridad por la Comisión de ventas de esta provincia, y considerando que es de urgente necesidad regularizar este servicio para evitar en lo posible los entorpecimientos que se observan en la desamortización de la propiedad corporativa, he acordado inculcar la observancia de las reglas siguientes:

1.º Los Ayuntamientos de esta provincia después de examinado el reconocimiento de montes publicado en 16 de febrero de 1859, procederán á formar el expediente de exclusión de ventas respecto de todas aquellas fincas que consideren deban ser exceptuadas, con arreglo á la ley de 1.º de mayo é instrucción de 31 del mismo mes de 1855, ó á la ley de 1856.

2.º Dichas corporaciones formarán los expedientes de exclusión atendiendo rigurosamente á lo que previene la citada legislación, con las ampliaciones que ordena la circular de 4 de agosto del presente año, cuyos expedientes así formados remitirán en todo el presente mes al Gobierno de mi cargo.

3.º Los particulares que se crean con derecho á reclamar como suyo algún monto ó finca que se halle comprendido en el inventario administrativo, y sujeto por consiguiente al correspondiente anuncio de subasta pública, solicitarán en su respectiva municipalidad la instrucción debida del expediente, al que acompañarán los títulos de pertenencia por medio de compulsas autorizadas por el Alcalde, Regidor, Síndico y Secretarios de aquellas corporaciones; la instrucción de estos expedientes será de oficio y gratuita para los particulares que la soliciten.

4.º Los Ayuntamientos tendrán muy presente y cuidarán de que se haga conocer al vecindario que no se puede suspender el curso del remate de fincas anunciadas en el Boletín oficial de esta provincia, con arreglo á varias disposiciones del Gobierno de S. M., y señaladamente porque así está dispuesto en Real orden de 15 de diciembre de 1859, que á continuación se inserta.

5.º Las denuncias ó peticiones de compra que en lo sucesivo se presenten, y de fincas ó montes no comprendidos en el reconocimiento

citado, expresarán la denominación, sitio, mensura, linderos, pertenencia, parroquia y Ayuntamiento en donde se halle enclavada.

6.º En el Boletín oficial inmediato á la fecha de estas peticiones se publicará la finca ó monte cuyo remate se solicite, con expresión de todas las precedentes circunstancias para que pueda conocerse con toda distinción; al mismo tiempo oficiará la Comisión provincial de ventas al Ayuntamiento respectivo, incluyéndole copia del anuncio; esta Corporación le fijará á la puerta del local donde celebre sus sesiones, remitiendo copia al pedáneo de la parroquia donde radique la finca para que la publique en tres domingos consecutivos á la salida de la misa popular, dándose parte oficial de haberse cumplido con este requisito.

7.º Pasados veinte días desde la publicación del anuncio en la parroquia, se procederá al reconocimiento, deslinde y tasación en la forma que la ley é instrucción de 31 de mayo de 1855 previene.

8.º Publicado el remate por término de treinta días en el Boletín oficial respecto á las fincas sobre las que no se haya hecho ninguna reclamación, se realizará indispensablemente aquel acto, con reserva del derecho y reclamaciones que se consideren justas sin que motiven la suspensión del remate anunciado.

Orense 8 de noviembre de 1860.
—El Gobernador, *Francisco Javier Camuño*.

Real orden que se cita.

DIRECCION GENERAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO

Por el Ministerio de Hacienda se ha dado traslado á esta Dirección general con fecha 13 del corriente de la Real orden que sigue:

«El Sr. El Sr. Ministro de Hacienda comunica con esta fecha al de Fomento la Real orden siguiente:

«Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. de la comunicación pasada á este Ministerio por el Gobernador de la provincia de Toledo en 2 del actual, con la que acompaña copia de la que dirige con la propia fecha al del digno cargo de V. E., relativa á las dificultades y conflictos que está ocasionando á la Administración la inexactitud con que se ha procedido en aquella provincia á la clasificación de los montes públicos que deben ó no reservarse de la desamortización;

Y considerando que la causa que ha producido las comunicaciones que dicha Autoridad ha dirigido á los Ministerios de Fomento y Hacienda, ha sido la suspensión de subasta de varias fincas reclamada por el Ingeniero del distrito, no obstante de no constar en la clasificación como invendibles, y ser su procedencia hasta distinta de aquellas de quienes dicho funcionario debía formar parte;

Considerando que son repetidas las Reales órdenes comunicadas por el Ministerio del digno cargo de V. E. ordenando á los Gobernadores que suspendan subastas de fincas anunciadas, y que si bien son cuál deben acatadas, producen frecuentemente dudas y reclamaciones por parte de los agentes de la Administración económica, alegando razones en pro de las causas que les han impulsado á promover la venta de las fincas suspendidas;

Y considerando que es de todo punto necesario, tanto para el buen nombre de

la Administración cuanto para los intereses del Estado, dictar una aclaración que evite la perplejidad en que los Comisionados de ventas se hallan en el cumplimiento de la clasificación de montes, aprobada por el Ministerio del digno cargo de V. E., aclaración que debe estar en armonía con el verdadero espíritu y letra del Real decreto de 16 de febrero de este año y Real orden del día siguiente dictada para su ejecución; la Reina (Q. D. G.) se ha servido resolver:

Primero. Que los Gobernadores de las provincias no acuerden por ningún concepto la suspensión de subastas de fincas que no se hallen expresa y claramente relacionadas con su denominación y procedencia en la sección de exceptuadas de la clasificación aprobada por S. M. en 30 de setiembre de este año.

Segundo. Que tampoco la acuerden de fincas vendidas con anterioridad á dicha aprobación y que se sacan nuevamente á subasta en quiebra á perjuicio de los primitivos rematantes, no solo porque quedaría negativa la responsabilidad imputada á estos por la ley, sino porque con arreglo al artículo 30 de la Real orden de 17 de febrero de este año las fincas que se hallen en este caso deben comprenderse en las relaciones de fincas enajenables.

Y tercero. Que se aplicará todo el rigor de las Instrucciones orgánicas á los Comisionados de ventas que promoviesen ó anunciaren en subasta las dem. s fincas declaradas expresamente exceptuadas en la clasificación. De Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes.

«Y de la propia Real orden, comunicada por el referido Sr. Ministro, lo traslado á V. I. para su debido cumplimiento.»

Lo que transcribo á V. S. para su inteligencia y gobierno, y á fin de que comuniquen sus oportunas órdenes para que se proceda á la inmediata venta de todas las fincas rústicas sujetas á la desamortización que no se hallen comprendidas expresamente entre las exceptuadas en la clasificación aprobada por S. M. en 30 de setiembre de este año, así como de las enajenadas antes de dicha fecha, y deban subastarse de nuevo en quiebra por falta de pago de los primitivos rematantes, aun cuando hayan sido declaradas como invendibles en la clasificación citada; y por último, se servirá V. S. no acordar la suspensión de subasta alguna, sean cuales fuesen las causas que se interpusieran, sin consultarlo antes con este Centro directivo; y en el caso de que no hubiera tiempo suficiente para obtener contestación, se llevará á efecto la subasta, remitiendo V. S. los testimonios con expresión de las circunstancias ó reclamaciones que se hubieran alegado en contra de la venta, para que suspendiendo esta oficina general su aprobación, acuerde lo que en el particular procediere.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de diciembre de 1859. — Luis de Estrada. — Sr. Gobernador de la provincia de....

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA PÚBLICA DE ESTA PROVINCIA

A las Juntas periciales de territorial.

La Dirección general de Contribuciones con fecha 19 del próximo pasado octubre se ha servido expedir la siguiente circular:

«En algunas Administraciones de Hacienda pública se ha suscitado la duda de «en qué pueblo deben amillarse las cajas de colmenas, si en aquel en cuyo término están situadas, ó en el que tienen la vecindad sus dueños.» Unas Administraciones pretenden que las cajas deben considerarse como ganadería, y al li-

carse por tanto á ellas lo mandado en la Real orden de 9 de mayo de 1855, y otras creen que no constituyen ganadería, sino una granjería á la cual no es aplicable la regla sobre vecindad de que habla la mencionada Real orden. En vista de todo, y considerando

1.º Que si bien el diccionario de la lengua comprende en el artículo «Ganado» el conjunto de abejas que hay en una colmena, no pasa esto de una voz genérica; pues en nada se parecen dichos insectos alados á las especies que constituyen la ganadería para los efectos de la contribución territorial:

2.º Que, aun aceptando la voz genérica de «Ganado» para las abejas que contienen las cajas, radicando éstas constantemente en el término de un pueblo, deben comprenderse entre los objetos imponibles del mismo, según lo mandado en el artículo 7.º del Real decreto de 23 de mayo de 1845.

Y 3.º Que no puede aplicarse al caso de que se trata lo mandado en la citada Real orden de 9 de mayo de 1855, dictada para fijar el punto en que deben contribuir los ganados trashumantes ó los estantes que por temporada salen de los pueblos en que sus dueños están avacendados; por estas razones, la Dirección ha acordado decir á V. S. que las cajas de colmena se incluyan en el amillaramiento del pueblo en que constantemente estén situadas, sea cual fuese la vecindad de sus dueños.»

La que comunica esta oficina á las Juntas periciales, para que la tengan presente al tiempo de la rectificación de los padrones de riqueza que deben remesar á esta Administración en todo el corriente mes, según se les tiene prevenido.

Orense 10 de noviembre de 1860.
—P. S., *Antonio Zaldivar*.

Por disposición del Sr. Gobernador civil de esta provincia se declara en vacante el Estanco de Madroa, dependiente de la Administración subalterna de Viana.

En su consecuencia, los que se crean aptos para su desempeño, pueden desde luego dirigir sus solicitudes al señor Gobernador civil, manifestando en ellas poder pagar al contado los efectos estancados que se les entreguen para la venta, y de reunir las circunstancias prescritas en la Real orden de 9 de julio de 1858; acompañando copias legalizadas de sus licencias absolutas ó documentos que acrediten servicios prestados al Estado, dentro del término de ocho días á contar desde esta fecha.

Orense 9 de noviembre de 1860.
—P. S., *Antonio Zaldivar*.

TERCERA SECCION

Juzgado de primera instancia de la Puebla de Trives.

Don Leonardo Casanova, juez de primera instancia de la Puebla de Trives.—

REPRESENTATIVE DELEGATION TAZ & R.